

No. 14668. Multilateral

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Guatemala

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 13 June 2012

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 13 June 2012

N° 14668. Multilatéral

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4

Guatemala

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 13 juin 2012

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 13 juin 2012

Nueva York, 13 de junio de 2012

Excelencia:

Tengo el honor de dirigirme a usted, en su calidad de depositario del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, para transmitirle la notificación del Gobierno de Guatemala en cumplimiento con el artículo 4, Numeral 3 del Pacto referido.

Al respecto, el pasado 1 de mayo de 2012 el Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros procedió a declarar Estado de Sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango, mediante el Decreto Gubernativo 1-2012.

El Decreto Gubernativo 1-2012, de vigencia inmediata, fue decretado por un plazo de treinta (30) días y con aplicación en el municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango, Guatemala. Se limitaron los derechos contenidos en los artículos 9, 12 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo referente a la detención legal, la libertad de locomoción y al derecho de reunión y manifestación, como también a la portación de armas.

Por otro lado, considerando que las circunstancias que motivaron dicha declaratoria han sido superadas, con fecha 18 de mayo de 2012 se procedió a derogar el Estado de Sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango referido de conformidad con el Decreto Gubernativo 2-2012.

En virtud de lo anterior, solicito sus buenos oficios para que sean informados por su conducto los demás Estados Partes del contenido de la presente notificación y documentos adjuntos.

Gert Rosenthal
Representante Permanente



Guatemala, 29 de mayo de 2012.

Señor Secretario General:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en acatamiento al artículo 4, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para hacer de su conocimiento que mediante Decreto Gubernativo 2-2012, el señor Otto Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros, el día 18 de mayo de 2012, derogó el Decreto Gubernativo 1-2012, de fecha 1 de mayo de 2012, mediante el cual se declaró el Estado de Sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango.

Las medidas anteriormente adoptadas mediante Decreto Gubernativo 1-2012, restringieron lo pertinente a la vigencia de los artículos 9, 12 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo referente a la detención legal, a la libertad de locomoción y al derecho de reunión y manifestación, como también a la portación de armas.

En ese sentido, considerando que las circunstancias que motivaron dicha declaratoria han sido superadas, se ha procedido a derogar el Decreto Gubernativo 1-2012.

En virtud de lo anterior, ruego a Su Excelencia que por su conducto sean informados los demás Estados Parte del Pacto.

Hago propicia la ocasión para expresar al señor Secretario General, la muestra de mi alta consideración y estima,

Harold Caballeros

Harold Caballeros
Ministro de Relaciones Exteriores



ORGANISMO EJECUTIVO



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Acuérdase declarar el Estado de Sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango durante treinta días.

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2012

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que es deber del Estado garantizar la vida, la integridad, la seguridad y tranquilidad de las personas y de sus bienes, adoptando las medidas necesarias para mantener la seguridad ciudadana y la paz social.

CONSIDERANDO:

Que en el municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango se han realizado una serie de hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la propiedad privada y el desarrollo integral de la persona.

CONSIDERANDO:

Que para resolver esa situación de contingencia, es urgente dictar las disposiciones legales que permitan adoptar las medidas necesarias a fin de mantener la paz social.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 138, 139, 183, literales e) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los artículos 1, 2, 6, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Orden Público.

EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1. Declaratoria. Se declara el Estado de Sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango durante treinta días.

Artículo 2. Justificación. El Estado de Sitio se decreta en virtud de los hechos acaecidos el día de hoy en el municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango, los cuales atentan contra la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la propiedad privada y el desarrollo integral de las personas.

Artículo 3. Limitación a los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de la anterior declaratoria y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de los derechos ciudadanos siguientes: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y portación de armas, contenidos en los artículos 5, 8, 9, 26, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se exceptúan las reuniones de orden religioso, deportivo, estudiantil y artístico.

Artículo 4. Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se podrán aplicar las restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la Constitución Política de la República señalados anteriormente, y las medidas establecidas en los artículos 8, 13, 16, 17, 18 y 19 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público.

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República ejercerá el Gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional.

Artículo 5. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que dentro del término de tres días conozca de esta disposición y resuelva lo que corresponda.

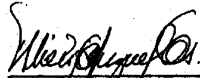
Artículo 8. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente y deberá ser publicado en el Diario de Centro América.


Dado en la ciudad de Guatemala, el uno de mayo del año dos mil doce.


PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

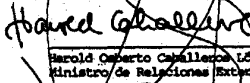

OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA

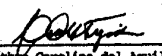

Ingrid Roxana Belcetti Elias
Vicepresidenta de la República



Ulises Escobar Cruz
Ministro de la Defensa Nacional

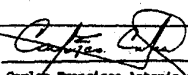

Héctor Manuel López Benilla
Ministro de Gobernación



Daniel Malasio Cruzano López
Ministro de Finanzas Públicas

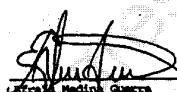

Harold Roberto Caballero López
Ministro de Relaciones Exteriores



Cinthya Carolina del Aguila Heredia
Ministra de Educación


Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

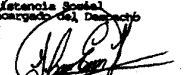

Carlos Francisco Antonio Contreras
Ministro de Trabajo y
Previsión Social

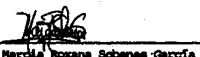

Sergio de la Torre Ciseno
Ministro de Economía


Leticia Medina Guasca
Ministra de Agricultura,
Ganadería y Alimentación


Elmer Andrés Muñoz Pérez
Vice ministro de Salud Pública y
Asistencia Social
Ejecutivo del Decreto


Erik Esteban Archila Dehesa
Ministro de Energía y Minas


Carlos Enrique Betzín Chojoj
Ministro de Cultura y Deportes


Ingrid Roxana Sobenes García
Ministra de Ambiente y
Recursos Naturales


Luz Elisabeth Jauffrè Soto
Ministra de Desarrollo Social


Carlos Manuel Morales
SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORGANISMO EJECUTIVO



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Acuérdase derogar el Decreto Gubernativo Número 1-2012, dictado en Consejo de Ministros, mediante el cual se declaró el Estado de Sitio durante treinta días, en el municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango.

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2-2012

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto Gubernativo número 1-2012 de fecha 1 de mayo de 2012, en Consejo de Ministros, el Presidente de la República declaró Estado de Sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango, derivado de hechos graves que pusieron en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a las personas y familias, habiendo puesto en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la propiedad privada y el desarrollo integral de las personas.

CONSIDERANDO

Que las circunstancias que motivaron dicha declaratoria han sido superadas, por lo cual es procedente derogar la disposición aludida en el considerando anterior.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 138, 182, 183 literal e) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los artículos 1 y 34 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público.

EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA

Artículo 1. Se deroga el Decreto Gubernativo Número 1-2012, dictado en Consejo de Ministros, mediante el cual se declaró el Estado de Sitio durante treinta días, en el municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango.

Artículo 2. El presente decreto gubernativo entra en vigencia inmediatamente, deberá ser publicado en el diario de Centro América y notificado al Congreso de la República para los efectos correspondientes.

Dado en la ciudad de Guatemala, el dieciocho de mayo de dos mil doce.

PUBLIQUESE Y CÚPLASE.

OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA



[Signature]
 Ingeniero Roxana Balceúti Elias
 Vicepresidenta de la República

[Signature]
 General José Armando Cruzón
 Ministro de la Defensa Nacional

[Signature]
 Ministerio de Gobernación
 Héctor Miguel López Bonilla
 Ministro de Gobernación

[Signature]
 María Castro
 Viceministra de Recursos Humanos
 Despacho del Despacho

[Signature]
 RITA CLAVIERE DE SODOLI
 Viceministra de Relaciones Exteriores
 Despacho de Despacho

[Signature]
 Ministerio de Educación
 Cinthya Carolina del Aguila
 Merchán
 Ministra de Educación

[Signature]
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda
 Alejandro Sinibaldi
 Ministro de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

[Signature]
 Carlos Francisco Urbón Contreras
 Solista
 Viceministro de Trabajo y
 Previsión Social

[Signature]
 Encargado del Despacho
 Claudia de Del Aguila
 Viceministra de Inversión
 y Comercio

[Signature]
 JEFES
 María Medina Guerra
 Ministra de Agricultura,
 Ganadería y Acuicultura

[Signature]
 Or. José A. Villavicencio Alvarez
 MINISTRO
 16-00-00 de Salud Pública A.S.

[Signature]
 Encargado del Despacho
 Encargado del Despacho
 Ministerio de Energía y Minas

[Signature]
 Carlos Enrique Buzón Chojoy
 Ministro de Cultura y Deportes

[Signature]
 María Emma Solares García
 Ministra de Ambiente y
 Recursos Naturales

[Signature]
 Licenciada Luz Elizabeth Leizaola
 MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

[Signature]
 Dr. Enrique Odeh
 Ministro de la Presidencia de la República

[TRANSLATION – TRADUCTION]

New York, 13 June 2012

Sir,

I have the honour to transmit to you, in your capacity as depositary of the International Covenant on Civil and Political Rights, the following notification by the Government of Guatemala in accordance with article 4, paragraph 3, of the Covenant.

In this connection, on 1 May 2012 the President of the Republic of Guatemala, in the Council of Ministers, declared a state of emergency in the town of Santa Cruz Barillas, Department of Huehuetenango, by Government Decree No. 1-2012.

Government Decree No. 1-2012 entered into force immediately for a period of thirty (30) days in the town of Santa Cruz Barillas, Department of Huehuetenango, Guatemala. It restricted the exercise of the rights referred to in articles 9, 12 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, with regard to lawful detention, freedom of movement and the right of assembly and demonstration, as well as the right to bear arms.

However, as the circumstances that led to that decree no longer exist, on 18 May 2012 the state of emergency in the town of Santa Cruz Barillas, Department of Huehuetenango, was lifted by Government Decree No. 2-2012.

In view of the foregoing, I request your good offices in communicating to the other States parties the contents of this notification and the documents attached herewith.

(Signed) Gert Rosenthal
Permanent Representative

Guatemala City, 29 May 2012

Sir,

I have the honour to inform you, in accordance with article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, that by virtue of Government Decree No. 2-2012, Mr. Otto Pérez Molina, President of the Republic of Guatemala, in the Council of Ministers on 18 May 2012, repealed Government Decree No. 1-2012 of 1 May 2012, whereby a state of emergency had been declared in the town of Santa Cruz Barillas, Department of Huehuetenango.

The measures previously adopted under Government Decree No. 1-2012 had imposed restrictions in relation to articles 9, 12 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, with regard to lawful detention, freedom of movement and the right of assembly and demonstration, as well as the right to bear arms.

In that connection, as the circumstances that had led to that declaration no longer exist, Government Decree No. 1-2012 was repealed.

Accordingly, I should be grateful if you would so inform the other States parties to the Covenant.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

(Signed) Harold Caballeros
Minister for Foreign Affairs

Executive Branch

Office of the President of the Republic

Approval of the declaration of a 30-day state of emergency in the town of Santa Cruz Barillas in the Department of Huehuetenango.

Government Decree No. 1-2012

The President of the Republic,

Whereas:

It is the duty of the State to protect the life, integrity, security and tranquillity of persons and property by taking the measures necessary to maintain public security and social peace,

Whereas:

In the town of Santa Cruz Barillas in the Department of Huehuetenango there have been a number of serious incidents that threaten the constitutional order, governance and national security, affecting individuals and families and endangering life, liberty, justice, security, peace, private property and the full development of the person,

Whereas:

In order to address these circumstances, it is urgent to enact legal provisions allowing for the adoption of measures to maintain social peace,

Therefore:

In exercise of the functions conferred under articles 138, 139 and 183, paragraphs (e) and (f), of the Political Constitution of the Republic of Guatemala, and on the basis of articles 1, 2, 6, 16, 17, 18 and 19 of the Public Order Act,

In the Council of Ministers,

Hereby decrees:

Article 1. Declaration. A state of emergency is hereby declared in the town of Santa Cruz Barillas in the Department of Huehuetenango for 30 days.

Article 2. Justification. The state of emergency is decreed as a result of the events that took place today in the town of Santa Cruz Barillas in the Department of Huehuetenango, which threaten governance and national security, affecting individuals and families and endangering life, liberty, justice, security, peace, private property and the full development of the person.

Article 3. Limitation of constitutional rights. As a result of the aforementioned declaration and while it is in force, the following rights of citizens shall be curtailed: freedom of action, lawful detention, interrogation of detainees and prisoners, freedom of movement, right of assembly and

demonstration and right to bear arms, which are provided for in articles 5, 6, 9, 26, 33 and the second paragraph of article 38 of the Political Constitution of the Republic of Guatemala. Assemblies of a religious, sporting or artistic nature or of students shall be excepted from this provision.

Article 4. Measures. While the state of emergency is in force, restrictions arising from the suspension of the above-mentioned articles of the Political Constitution of the Republic may be applied, as well as the measures set out in articles 8, 13, 16, 17, 18 and 19 of Decree No. 7 of the Constituent Assembly of the Republic of Guatemala, Public Order Act.

During the state of emergency the President of the Republic shall govern in his capacity as General Commander of the Army, through the Ministry of Defence.

Article 5. Convocation. The Congress of the Republic shall be convoked within three days to be informed of this provision and to take such action as may be appropriate.

Article 6. Entry into force. The present Government Decree shall enter into force immediately and shall be published in the Official Gazette of Central America.

Done at Guatemala City on 1 May 2012.

For publication and implementation

(Signed) Otto Fernando Pérez Molina

(Signed) Ingrid Roxana Baldetti Elías
Vice-President of the Republic

(Signed) Ulises Noé Anzueto Girón
Minister of Defence

(Signed) Héctor Mauricio López Bonilla
Minister of the Interior

(Signed) Pavel Vinicio Centeno López
Minister of Public Finance

(Signed) Harold Osberto Caballeros López
Minister for Foreign Affairs

(Signed) Cinthya Carolina del Águila Mendizábal
Minister of Education

(Signed) Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio
Minister of Communications, Infrastructure and Housing

(Signed) Carlos Francisco Antonio Contreras Solórzano
Minister of Labour and Social Security

(Signed) Sergio de la Torre Gimeno
Minister of Economic Affairs

(Signed) Efraín Medina Guerra
Minister of Agriculture, Livestock and Food

(Signed) Elmer Marcelo Núñez Pérez
Deputy Minister of Public Health and Social Welfare
Head of Office

(Signed) Erick Estuardo Archila Dehesa
Minister of Energy and Mining

(Signed) Carlos Enrique Batzín Chojoj
Minister of Culture and Sports

(Signed) Marcia Roxana Sobenes García
Minister of the Environment and Natural Resources

(Signed) Luz Elizabeth Lainfiesta Soto
Minister for Social Development

(Signed) Gustavo Adolfo Martínez Luna
Secretary-General
Office of the President of the Republic

Executive Branch

Office of the President of the Republic

Approval of the repeal of Government Decree No. 1-2012, issued in the Council of Ministers, whereby a 30-day state of emergency was declared in the town of Santa Cruz Barillas in the Department of Huehuetenango.

Government Decree No. 2-2012

The President of the Republic,

Whereas:

By Government Decree No. 1-2012 of 1 May 2012, in the Council of Ministers, the President of the Republic declared a state of emergency in the town of Santa Cruz Barillas in the Department of Huehuetenango as a result of a number of serious incidents that threatened the constitutional order, governance and national security, affecting individuals and families and endangering life, liberty, justice, security, peace, private property and the full development of the person,

Whereas:

The circumstances that led to that declaration no longer obtaining, it is appropriate to repeal the provision referred to in the previous paragraph,

Therefore:

In exercise of the functions conferred under articles 138, 182 and 183, paragraph (c), of the Political Constitution of the Republic of Guatemala, and on the basis of articles 1 and 34 of Decree No. 7 of the Constituent Assembly, Public Order Act,

In the Council of Ministers,

Hereby decrees:

Article 1. Government Decree No. 1-2012, issued in the Council of Ministers, whereby a 30-day state of emergency was declared in the town of Santa Cruz Barillas in the Department of Huehuetenango, is hereby repealed.

Article 2. The present Government Decree shall enter into force immediately and shall be published in the Official Gazette of Central America, and the Congress of the Republic shall be so notified for appropriate action.

Done at Guatemala City on 18 May 2012.

For publication and implementation

(Signed) Otto Fernando Pérez Molina

(Signed) Ingrid Roxana Baldetti Elías
Vice-President of the Republic

(Signed) Ulises Noé Anzueto Girón
Minister of Defence

(Signed) Héctor Mauricio López Bonilla
Minister of the Interior

(Signed) María Castro
Deputy Minister of Public Finance
Head of Office

(Signed) Rita Claverie de Sciolli
Deputy Minister for Foreign Affairs
Head of Office

(Signed) Cinthya Carolina del Águila Mendizábal
Minister of Education

(Signed) Alejandro Sinibaldi
Minister of Communications, Infrastructure and Housing

(Signed) Carlos Francisco Antonio Contreras Solórzano
Minister of Labour and Social Security

(Signed) Claudia de del Águila
Deputy Minister of Investment and Competition
Head of Office

(Signed) Efraín Medina Guerra
Minister of Agriculture, Livestock and Food

(Signed) Jorge Alejandro Villavicencio Alvarez
Minister of Public Health and Social Welfare

(Signed) Erick Estuardo Archila Dehesa
Minister of Energy and Mining

(Signed) Carlos Enrique Batzín Chojj
Minister of Culture and Sports

(Signed) Marcia Roxana Sobenes García
Minister of the Environment and Natural Resources

(Signed) Luz Elizabeth Lainfiesta
Minister for Social Development

(Signed) Gustavo Adolfo Martínez Luna
Secretary-General
Office of the President of the Republic

[TRANSLATION – TRADUCTION]

New York, le 13 juin 2012

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint, en votre qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la notification exigée du Gouvernement guatémaltèque par le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte.

À cet égard, le Président de la République du Guatemala a déclaré l'état de siège dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango) par décret gouvernemental no 1-2012 adopté le 1er mai 2012 en Conseil des ministres.

L'état de siège a été déclaré, avec effet immédiat, par décret gouvernemental no 1-2012, pour une durée de 30 jours dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango). Ledit décret limitait l'exercice des droits visés aux articles 9, 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ayant trait à la détention légale, à la liberté de circulation et à la liberté de réunion et de manifestation ainsi qu'à l'exercice du droit de port d'armes.

Par la suite, les causes qui avaient motivé la déclaration de l'état de siège ayant disparu, l'état de siège a été levé, par décret gouvernemental no 2-2012 du 18 mai 2012, dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango).

En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir faire transmettre à tous les États parties au Pacte le texte de la présente notification et des documents ci-joints.

Le Représentant permanent
(Signé) Gert Rosenthal
Guatemala, le 29 mai 2012

Monsieur le Secrétaire général,

En application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par le décret gouvernemental no 2-2012 du 18 mai 2012 adopté en Conseil des ministres, le Président de la République du Guatemala, Otto Pérez Molina, a abrogé le décret gouvernemental no 1-2012 du 1er mai 2012 déclarant l'état de siège dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango).

La mesure qui avait été adoptée par décret gouvernemental no 1-2012 limitait l'exercice des droits visés aux articles 9, 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ayant trait à la détention légale, à la liberté de circulation et à la liberté de réunion et de manifestation ainsi qu'à l'exercice du droit de port d'armes.

À cet égard, la disparition des causes qui avaient motivé la déclaration de l'état de siège a donné lieu à l'abrogation dudit décret.

En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir informer les autres États parties au Pacte des mesures susmentionnées.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.

Le Ministre des affaires étrangères
(Signé) Harold Caballeros

Pouvoir exécutif

Présidence de la République

Approbation de la déclaration de l'état de siège de 30 jours dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango)

Décret gouvernemental no 1-2012

Le Président de la République

Considérant :

Qu'il est du devoir de l'État de garantir la vie, l'intégrité, la sécurité et la tranquillité des personnes et de protéger leurs biens, en adoptant les mesures nécessaires au maintien et l'ordre et de la paix sociale,

Que, dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango), il s'est produit de graves événements qui risquent de compromettre l'ordre constitutionnel, la gouvernance et la sécurité de l'État, de perturber la vie des personnes et des familles, et de porter préjudice à la vie, à la liberté, à la justice, à la sécurité, à la paix, à la propriété privée et au plein épanouissement des personnes,

Que, face à cette situation de crise, il importe d'édicter d'urgence des dispositions juridiques qui permettent de prendre des mesures visant à préserver la paix sociale,

Par les présentes :

Dans l'exercice des fonctions établies par les articles 138, 139 et 183 e) et f) de la Constitution politique de la République du Guatemala; et conformément aux articles 1, 2, 6, 16, 17, 18 et 19 de la loi relative à l'ordre public,

En Conseil des ministres,

Décide ce qui suit :

Article 1. Déclaration. L'état de siège est décrété dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango) pour une durée de 30 jours.

Article 2. Justification. L'état de siège est décrété en raison des événements graves qui se sont produits ces derniers jours dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango) et qui compromettent la gouvernance et la sécurité de l'État, perturbent la vie des personnes et des familles, et portent préjudice à la vie, à la liberté, à la justice, à la sécurité, à la paix, à la propriété privée et au plein épanouissement des personnes.

Article 3. Limitation des droits constitutionnels. Par la déclaration ci-dessus, les droits civils ci-après sont révoqués pendant toute la durée de l'état de siège : la liberté d'action, la détention légale, l'interrogation des détenus ou prisonniers, la liberté de mouvement, les droits de réunion et de

manifestation et de port d'armes, consacrés aux articles 5, 6, 9, 26 et 33 et au deuxième paragraphe de l'article 38 de la Constitution politique de la République du Guatemala, à l'exception des réunions à caractère religieux, sportif, estudiantin ou artistique.

Article 4. Mesures. Pendant la durée de l'état de siège, sont appliquées les restrictions découlant de la suspension de l'application des articles susmentionnés de la Constitution politique de la République, ainsi que les mesures énoncées aux articles 8, 13, 16, 17, 18 et 19 du décret no 7 de l'Assemblée constituante de la République du Guatemala, concernant la loi relative à l'ordre public.

Durant l'état de siège, le Président de la République exerce l'autorité de commandant général de l'armée, par l'intermédiaire du Ministre de la défense.

Article 5. Convocation. Le Congrès de la République est convoqué pour, dans un délai de trois jours, prendre connaissance de la disposition susmentionnée et statuer sur la question.

Article 6. Entrée en vigueur. Le présent décret gouvernemental prend effet immédiatement et sera publié au Journal officiel d'Amérique centrale (Diario de Centro América).

Fait à Guatemala, le premier mai deux mil douze.

Pour publication et exécution

Otto Fernando Pérez Molina

Vice-Présidente de la République
Ingrid Roxana Baldetti Elías

Ministre de la défense
Ulises Noé Anzueto Girón

Ministre de l'intérieur
Héctor Mauricio López Bonilla

Ministre des finances publiques
Pavel Vinicio Centeno López

Ministre des affaires étrangères
Harold Osberto Caballeros López

Ministre de l'éducation
Cynthia Carolina del Águila Mendizábal

Ministre des communications, des travaux publics et du logement
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio

Ministre du travail et de la prévoyance sociale
Carlos Francisco Antonio Contreras

Ministre de l'économie
Sergio de la Torre Gimeno

Ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation
Efrain Medina Guerra

Vice-Ministre de la santé publique et de l'assistance sociale
Chargé d'affaires
Elmer Marcelo Núñez Pérez

Ministre de l'énergie et des mines
Érick Estuardo Archila Dehesa

Ministre de la culture et des sports
Carlos Enrique Batzin Chojoj

Ministre de l'environnement et des ressources naturelles
Marcia Roxana Sobenes García

Ministre du développement social
Luz Elizabeth Lainfiesta Soto

Secrétaire général de la présidence de la République
Gustavo Adolfo Martínez Luna

Pouvoir exécutif

Présidence de la République

Abrogation du décret gouvernemental no 1-2012 portant déclaration de l'état de siège pour une durée de 30 jours dans la municipalité de Santa Cruz Barilla, du département de Huehuetenango, adopté en Conseil des ministres

Décret gouvernemental no 2-2012

Le Président de la République

Considérant :

Que, par décret gouvernemental no 1-2012 du 1er mai 2012, le Président de la République a déclaré, en Conseil des ministres, l'état de siège dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango) pour une durée de 30 jours, après qu'il s'y est produit des événements graves qui compromettaient l'ordre constitutionnel, la gouvernance et la sécurité de l'État, perturbaient la vie des personnes et des familles, et portaient préjudice à la vie, à la liberté, à la justice, à la sécurité, à la paix, à la propriété privée et au plein épanouissement des personnes,

Que la disparition des causes qui avaient motivé la déclaration de l'état de siège justifie l'abrogation dudit décret,

Par les présentes :

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 138, 182 et 183 e) de la Constitution politique de la République du Guatemala, et en vertu des articles 1 et 34 de la loi relative à l'ordre public issue du décret no 7 de l'Assemblée nationale constituante,

En Conseil des ministres,

Décide ce qui suit :

Article 1. Le décret gouvernemental no 1-2012 portant déclaration de l'état de siège pour une durée de 30 jours dans la municipalité de Santa Cruz Barilla, du département de Huehuetenango, adopté en Conseil des ministres, est abrogé.

Article 2. Le présent décret gouvernemental prend effet immédiatement et sera publié au Journal officiel d'Amérique centrale (Diario de Centro América) et porté à la connaissance du Congrès de la République, aux fins pertinentes.

Fait à Guatemala, le dix-huit mai deux mil douze.

Pour publication et execution

Otto Fernando Pérez Molina

Vice-Présidente de la République
Ingrid Roxana Baldetti Elías

Ministre de la défense
Ulises Noé Anzueto Girón

Ministre de l'intérieur
Héctor Mauricio López Bonilla

Vice-Ministre des finances publiques
Chargée d'affaires
María Castro

Vice-Ministre des affaires étrangères
Chargée d'affaires
Rita Claverie de Scioli

Ministre de l'éducation
Cynthia Carolina del Águila Mendizábal

Ministre des communications, des travaux publics et du logement
Alejandro Sinibaldi

Ministre du travail et de la prévoyance sociale
Carlos Francisco Antonio Contreras

Vice-Ministre de l'investissement et de la concurrence
Chargée d'affaires
Claudia de Del Águila

Ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation
Efraín Medina Guerra

Vice-Ministre de la santé publique et de l'assistance sociale
Jorge Villavicencio Álvarez

Ministre de l'énergie et des mines
Érick Estuardo Archila Dehesa

Ministre de la culture et des sports
Carlos Enrique Batzín Chojoj

Ministre de l'environnement et des ressources naturelles
Marcia Roxana Sobenes García

Ministre du développement social
Luz Elizabeth Lainfiesta

Secrétaire général de la présidence de la République
Gustavo Adolfo Martínez Luna

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Peru

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 1 June 2012

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 June 2012

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4

Pérou

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 1^{er} juin 2012

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 1^{er} juin 2012

Misión Permanente del Perú
ante las Naciones Unidas

Permanent Mission of Peru
to the United Nations

7-1-SG/26

La Representación Permanente del Perú ante las Naciones Unidas saluda atentamente a la Secretaría de las Naciones Unidas (Oficina de Asuntos Jurídicos) y, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene a honra informar que, mediante Decreto Supremo N° 056-2012-PCM, publicado el 28 de mayo de 2012, cuya copia se adjunta a la presente, se declaró por treinta (30) días, a partir del 29 de mayo de 2012, el Estado de Emergencia en la Provincias de Espinar del Departamento de Cusco, manteniendo la Policía Nacional del Perú el control del orden interno.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos el derecho a la inviolabilidad de domicilio, al libre tránsito, a la libertad de reunión y a la libertad y seguridad personal, contemplados en los incisos 9, 11, 12, Y 24.f del artículo 2, de la Constitución Política del Perú y en los artículos 17, 12,21 Y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente.

La Representación Permanente del Perú ante las Naciones Unidas hace propicia la oportunidad para reiterar a la Secretaría de las Naciones Unidas (Oficina de Asuntos Jurídicos) las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 01 de junio de 2012.

A la Secretaría de las Naciones Unidas
Oficina de Asuntos Jurídicos
Sección de Tratados
Fax 3.3693
Nueva York.-

**DECRETO SUPREMO
N° 056-2012-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 44 de la Constitución Política del Perú, prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, el ejercicio de derechos fundamentales de la población, como el derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras del territorio de la República, el derecho a la paz, a la tranquilidad, a la educación, a la libertad de trabajo, como a ejercer el comercio e industria y demás pertinentes, previstos en los Artículos 2, 13 y 59 de la Constitución Política del Perú, vienen siendo perturbados por actos de violencia en la provincia de Espinar del departamento de Cusco que impiden su normal ejercicio, afectando la integridad física de civiles y miembros de la Policía Nacional del Perú, así como la propiedad pública y privada, a raíz de las acciones y actividades vinculadas o relacionadas de hechos propiciados contra

las actividades mineras de la empresa Xstrata Tintaya y proyecto Antapacay;

Que, la magnitud de los hechos acaecidos, demanda la adopción de medidas que permitan al Estado ejecutar acciones inmediatas destinadas a controlar y minimizar los riesgos existentes y aquellos que se puedan generar; por lo que es necesario la declaratoria del Estado de Emergencia en la Provincia de Espinar del Departamento de Cusco; debiéndose adoptar las disposiciones y medidas constitucionalmente previstas para restablecer el orden interno y procurar la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos y los servicios públicos o privados;

Que, corresponde al Presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú, así como velar por el orden interno de la República, de conformidad a lo establecido en el Artículo 118, incisos 1) y 4), de la Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 1) del Artículo 137 de la Constitución Política del Perú, otorga al Presidente de la República la potestad de decretar el Estado de Emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación;

Que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite, a través de su Artículo 27 inciso 1), que un Estado parte suspenda el ejercicio de determinadas garantías cuando exista un peligro público u otra emergencia que amenace su seguridad;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú y los literales b) y d) del numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1°.- Declaratoria de Estado de Emergencia

Declárese el Estado de Emergencia por el término de treinta (30) días en la Provincia de Espinar del Departamento de Cusco, manteniendo la Policía Nacional del Perú el control del orden interno.

Artículo 2°.- Suspensión de Garantías

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en las circunscripciones señaladas en el mismo, quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidas en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ URQUIZO MAGGIA
Ministro de Defensa

WILVER ALFREDO CALLE GIRÓN
Ministro del Interior

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

794287-1

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Office of Legal Affairs of the Secretariat of the United Nations and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 056-2012-PCM, issued on 28 May 2012, a copy of which is attached hereto, a state of emergency was declared for a period of thirty (30) days, in effect from 29 May 2012, in the province of Espinar, department of Cusco, where the National Police of Peru shall maintain public order.

During the state of emergency, the right to inviolability of the home, freedom of movement, freedom of assembly and liberty and security of person, set out in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17, 12, 21 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, are suspended.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Office of Legal Affairs of the Secretariat of the United Nations the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 1 June 2012

Office of the President of the Council of Ministers

Supreme decree declaring a state of emergency in the province of Espinar, department of Cusco

Supreme Decree No. 056-2012-PCM

The President of the Republic

Considering:

That, article 44 of the Political Constitution of Peru provides that it is the prime duty of the State to guarantee the full enjoyment of basic rights, to protect the population from threats to their security, and to promote general welfare based on justice and on the comprehensive and balanced development of the Nation;

That the exercise of basic rights by the population, such as the right to liberty and security of person, freedom of movement on roads and highways in the territory of the Republic, peace, tranquillity, education, freedom to work and engage in business or industry, and other relevant rights pursuant to articles 2, 13 and 59 of the Constitution, is being disrupted by acts of violence in the province of Espinar that impede the normal exercise thereof, affecting the physical integrity of civilians and members of the National Police of Peru, as well as public and private property, as a result of actions and activities linked or related to acts committed against the mining activities of the company Xstrata Tintaya and the Atapacay project;

That the events which have occurred are of such magnitude as to require the adoption of measures enabling the State to take immediate action to control and minimize existing and potential threats, making it necessary to declare a state of emergency in the province of Espinar, department of Cusco and, pursuant to the Constitution, to take steps and adopt measures to restore public order and find ways of upholding the rights of citizens and protecting public and private services;

That it is incumbent on the President of the Republic to observe and enforce the Political Constitution of Peru, as well as to uphold public order in the Republic, in accordance with article 118, paragraphs 1 and 4, of the Political Constitution of Peru;

That, under article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru, the President of the Republic is authorized to declare a state of emergency in the event of disturbance of the peace or of public order or of serious circumstances affecting the life of the Nation;

That, in accordance with article 27, paragraph 1, of the American Convention on Human Rights, a State party may suspend the exercise of specific guarantees when a public danger or other emergency threatens its security;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, and article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru, as well as article 4, paragraphs 2 (b) and 2 (d), of Act No. 29158, the Organic Law of the Executive Branch; and,

With the affirmative vote of the Council of Ministers, and with the obligation of reporting to the Congress of the Republic;

Decreases:

Article 1. Declaration of a state of emergency

A state of emergency is hereby declared for a period of thirty (30) days in the province of Espinar, department of Cusco, where the National Police shall maintain public order.

Article 2. Suspension of guarantees

During the state of emergency and in the locations referred to in article 1 hereof, constitutional guarantees relating to liberty and security of person, inviolability of the home and freedom of assembly and movement in the territory, as set forth in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, are suspended.

Article 3. Endorsement

The present supreme decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 28 May 2012.

Ollanta Humala Tasso
Constitutional President of the Republic

Óscar Valdés Dancuart
President of the Council of Ministers

José Urquiza Maggia
Minister of Defence

Wilver Alfredo Calle Girón
Minister of the Interior

Juan F. Jiménez Mayor
Minister of Justice and Human Rights

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer que le décret suprême no 056-2012-PCM, publié le 28 mai 2012 et dont le texte est joint à la présente, déclare, pour une durée de trente (30) jours, à compter du 29 mai 2012, l'état d'urgence dans la province d'Espinar (département de Cusco), et que la Police nationale du Pérou est chargée d'y assurer le maintien de l'ordre intérieur.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à l'inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté de la personne, consacrés, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 1^{er} juin 2012

Présidence du Conseil des ministres

Déclaration de l'état d'urgence dans la province d'Espinar, du département de Cusco

Décret suprême no 056-2012-PCM

Le Président de la République,

Considérant :

Que, selon l'article 44 de la Constitution politique du Pérou, l'État a pour devoirs primordiaux de garantir l'exercice effectif des droits fondamentaux des citoyens, de pourvoir à la sûreté des habitants et d'agir pour le bien général, qui est fondé sur la justice et sur le développement intégral et équilibré de la nation;

Que l'exercice des droits fondamentaux de la population, tels que le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, à la libre circulation sur les voies et routes du territoire de la République, le droit à la paix, à la tranquillité, à l'éducation, à la liberté de travailler et d'exercer son activité commerciale, industrielle ou autre, énoncés aux articles 2, 13 et 59 de la Constitution politique du Pérou, est actuellement perturbé par des actes de violence qui empêchent la jouissance normale de ces droits et qui portent atteinte à l'intégrité physique de civils et de membres de la Police nationale du Pérou, ainsi qu'aux biens publics et à la propriété privée dans la province d'Espinar, du département de Cusco, actes qui font suite à des agissements commis en relation avec des attaques menées contre les opérations minières de l'entreprise Xstrata Tintaya et contre le projet Antapacay;

Que la gravité des faits nécessite l'adoption de mesures permettant à l'État de lancer des actions immédiates de maîtrise et de limitation des risques actuels et éventuels; que, pour cette raison, il est nécessaire de décréter l'état d'urgence dans la province d'Espinar, du département de Cusco, et de prendre les dispositions et mesures prévues par la Constitution pour rétablir l'ordre intérieur et assurer la défense et la protection des droits des citoyens et des services publics et privés;

Qu'il appartient au Président de la République de respecter et de faire respecter la Constitution, ainsi que de veiller au maintien de l'ordre intérieur de la République, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 4 de l'article 118 de la Constitution;

Que le paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution donne au Président de la République le pouvoir de décréter l'état d'urgence, en cas d'atteinte à la paix ou à l'ordre intérieur, ou en cas de circonstances graves menaçant la vie de la nation;

Que la Convention américaine relative aux droits de l'homme permet, au paragraphe 1 de son article 27, à un État partie de suspendre l'exercice de certains droits constitutionnels lorsqu'il existe un danger pour l'ordre public ou une autre urgence qui menace sa sécurité;

Conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 14 de l'article 118, et du paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, ainsi que des alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi no 29 158 (loi portant organisation du pouvoir exécutif);

Avec l'approbation du Conseil des ministres, et sous réserve d'en référer au Congrès de la République,

Décète ce qui suit :

Article 1 : Déclaration de l'état d'urgence

L'état d'urgence est déclaré pour une durée de trente (30) jours dans la province d'Espinar, du département de Cusco. La Police nationale du Pérou est chargée d'assurer le maintien de l'ordre intérieur.

Article 2 : Suspension des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence déclaré à l'article précédent et dans les circonscriptions qui y sont mentionnées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à l'inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 3 : Contreseing

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de la défense, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le vingt-huit mai deux mil douze.

Le Président constitutionnel de la République
Ollanta Humala Tasso

Le Président du Conseil des ministres
Óscar Valdés Dancuart

Le Ministre de la défense
José Urquiza Maggia

Le Ministre de l'intérieur
Wilver Alfredo Calle Girón

Le Ministre de la justice et des droits de l'homme
Juan F. Jiménez Mayor

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4(3)

Peru

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 1 June 2012

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 June 2012

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4

Pérou

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 1^{er} juin 2012

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 1^{er} juin 2012

**Misión Permanente del Perú
ante las Naciones Unidas**

**Permanent Mission of Peru
to the United Nations**

7-1-SG/ 24

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas saluda atentamente a la Secretaría de las Naciones Unidas y tiene a honra referirse al Decreto Supremo 085-2011-PCM (5 de noviembre de 2011) a través del cual se declaró el Estado de Emergencia en las Provincias de Huanta y La Mar del Departamento de Ayacucho; en la Provincia de Tayacama del Departamento de Huancavelica; en los Distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba de la Provincia de La Convención del Departamento de Cusco; en la Provincia de Satipo; en los Distritos de Andamarca y Comas de la Provincia de Concepción y en los Distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuaca de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín. Cabe destacar que el citado Estado de Emergencia fue prorrogado mediante Decreto Supremo 004-2012-PCM (4 de enero de 2012) y 022-2012-PCM (6 de marzo de 2012).

Al respecto, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas informa que mediante Decreto Supremo 060-2012-PCM, cuya copia se adjunta a la presente, se prorrogó por sesenta días, a partir del 04 de junio de 2012, el citado Estado de Emergencia.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos el derecho a la inviolabilidad de domicilio, al libre tránsito, a la libertad de reunión y a la libertad y seguridad personal, contemplados en los incisos 9, 11, 12, Y 24.f del artículo 2, de la Constitución Política del Perú y en los artículos 17, 12, 21 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas hace propicia la oportunidad para reiterar a la Secretaría de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 01 de junio de 2012.

A la Secretaría de las Naciones Unidas
Oficina de Asuntos Jurídicos
Sección de Tratados
Fax 3.3693
Nueva York.-

**DECRETO SUPREMO
N° 060-2012-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 034-2012-PCM publicado el 29 de marzo de 2012, se prorrogó por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 05 de abril de 2012, el Estado de Emergencia en las provincias de Huanta y La Mar del departamento de Ayacucho; en la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas de la provincia de Concepción y en los distritos de Acobamba y Pariahuanca de la provincia de Huancayo del departamento de Junín;

Que, estando por vencer el plazo de vigencia del Estado de Emergencia, referido en el considerando precedente, y de acuerdo con lo manifestado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mediante el Oficio N° 447-JCCFFAA/SG de fecha 23 de mayo de 2012, aún subsisten las condiciones que determinaron la declaratoria del Estado de Emergencia en las provincias y distritos indicados; por lo que es necesario prorrogar el mismo a fin que la presencia de las Fuerzas Armadas, con su acertado accionar, permita que la población se identifique con los fines u objetivos que busca el Gobierno Nacional, esto es, la consolidación de la pacificación de la zona y del país;

Que, el numeral 1) del artículo 2137° de la Constitución Política del Perú, establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo;

Que, por Decreto Legislativo N° 1095 de fecha 01 de setiembre de 2010, se establecieron los procedimientos que regulan la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en Estado de Emergencia;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

DECRETA:

Artículo 1°.- Prórroga de Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 04 de junio de 2012, el Estado de Emergencia en las provincias de Huanta y La Mar del departamento de Ayacucho; en la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas de la provincia de Concepción y en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

Artículo 2°.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en las circunscripciones señaladas en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ANTONIO URQUIZO MAGGIA
Ministro de Defensa

WILVER ALFREDO CALLE GIRÓN
Ministro del Interior

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

794288-6

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Secretariat of the United Nations and has the honour to refer to Supreme Decree 085-2011-PCM (5 November 2011), by which a state of emergency was declared in the provinces of Huanta and La Mar, in the department of Ayacucho; in the province of Tayacaja, department of Huancavelica; in the districts of Kimbiri, Pichari and Vilcabamba, province of La Convención, in the department of Cusco; in the province of Satipo; in the districts of Andamarca and Comas, province of Concepción; and in the districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca province of Huancayo, department of Junín. The aforementioned state of emergency was extended by Supreme Decrees 004-2012-PCM (4 January 2012) and 022-2012-PCM (6 March 2012).

In that regard, in accordance with the provisions of article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Permanent Mission of Peru to the United Nations informs the Secretariat of the United Nations that, by Supreme Decree 060-2012-PCM, a copy of which is attached to the present note, the state of emergency was extended for 60 days, in effect from 4 June 2012.

During the state of emergency, the right to inviolability of the home, freedom of movement, freedom of assembly and liberty and security of person, set out in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17, 12, 21 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, are suspended.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Secretariat of the United Nations the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 1 June 2012

Supreme Decree No. 060-2012-PCM

The President of the Republic,

Considering:

That, by Supreme Decree No. 034-2012-PCM issued on 29 March 2012, the state of emergency in the provinces of Huanta and La Mar, department of Ayacucho; in the province of Tayacaja, department of Huancavelica; in the districts of Kimbiri, Pichari and Vilcabamba, province of La Convención, department of Cusco; in the province of Satipo; in the districts of Andamarca and Comas, province of Concepción; and in the districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca, province of Huancayo, department of Junín, was extended for a period of sixty (60) calendar days, in effect from 5 April 2012;

That, while the term of the state of emergency referred to in the preceding paragraph is about to expire, and according to report No. 447-JCCFFAA/SG of 23 May 2012 of the chief of the Armed Forces Joint Command, the conditions that gave rise to the declaration of a state of emergency in the above-mentioned provinces and districts still prevail, making it necessary to extend the state of emergency so that the Armed Forces, through its presence and sensible actions, could help the population to identify with the goals or objectives sought by the national Government, namely peacebuilding in the area and across the country;

That, article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru, provides that the extension of a state of emergency requires a new decree;

That Legislative Decree No. 1095 of 1 September 2010 established the procedures governing the intervention of the armed forces in areas where a state of emergency has been declared;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, of the Political Constitution of Peru; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1. Extension of the state of emergency

The state of emergency in the provinces of Huanta and La Mar, department of Ayacucho; in the province of Tayacaja, department of Huancavelica; in the districts of Kimbiri, Pichari and Vilcabamba, province of La Convención, in the department of Cusco; in the province of Satipo; in the districts of Andamarca and Comas, province of Concepción; and in the districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca, province of Huancayo, department of Junín, is hereby extended for a period of sixty (60) calendar days, in effect from 4 June 2012.

Article 2. Suspension of constitutional rights

During the state of emergency referred to in the preceding article and in the locations indicated therein, the constitutional rights to liberty and security of person, inviolability of the home, and freedom of assembly and movement in the territory, set out in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3. Endorsement

The present supreme decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 28 May 2012.

Ollanta Humala Tasso
Constitutional President of the Republic

Óscar Valdés Dancuart
President of the Council of Ministers

José Antonio Urquiza Maggia
Minister of Defence

Wilver Alfredo Calle Girón
Minister of the Interior

Juan F. Jiménez Mayor
Minister of Justice and Human Rights

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation et a l'honneur de se référer au décret suprême no 085-2011-PCM, du 5 novembre 2011, portant déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d'Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín). Il convient de signaler que l'état d'urgence susmentionné a été prorogé par décrets suprêmes no 004-2012-PCM du 4 janvier 2012 et no 022-3012-PCM du 6 mars 2012.

À cet égard, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies informe le Secrétariat de l'Organisation que le décret suprême no 060-2012-PCM, dont le texte est joint à la présente, proroge, pour une durée de 60 jours à compter du 4 juin 2012, l'état d'urgence susmentionné.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence, l'exercice des droits relatifs à l'inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté de la personne, consacrés, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 1^{er} juin 2012

Décret suprême no 060-2012-PCM

Le Président de la République,

Considérant :

Que, par décret suprême no 034-2012-PCM publié le 29 mars 2012, l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de soixante (60) jours civils à compter du 5 avril 2012 dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d'Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín);

Qu'alors que la durée d'application de l'état d'urgence mentionné à l'alinéa précédent est sur le point d'expirer, et que, conformément à ce que signale le chef de l'état-major conjoint des Forces armées dans sa communication no 447-JCCFFAA/SG en date du 23 mai 2012, les circonstances ayant motivé l'instauration dudit état d'urgence dans les provinces et districts précités persistent, rendant ainsi nécessaire sa prorogation afin de permettre à la Police nationale du Pérou, s'acquittant de son devoir de diligence, d'aider la population à se reconnaître dans les buts et objectifs recherchés par le Gouvernement central, à savoir la consolidation de la paix dans ladite zone et dans le pays;

Que le paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou dispose que la prorogation de l'état d'urgence doit faire l'objet d'un nouveau décret suprême;

Que le décret législatif no 1095 du 1er septembre 2010 instaure les procédures réglementant l'intervention des forces armées dans les zones où l'état d'urgence a été décrété;

Conformément aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 de la Constitution politique du Pérou;
Avec l'approbation du Conseil des ministres, et sous réserve d'en référer au Congrès de la République,

Décète ce qui suit :

Article 1 : Prorogation de l'état d'urgence

L'état d'urgence est prorogé pour une durée de soixante (60) jours civils à compter du 4 juin 2012 dans les provinces de Huanta et La Mar (département d'Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la

province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).

Article 2 : Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence mentionné à l'article précédent et dans les circonscriptions qui y sont mentionnées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à l'inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 3 : Contresigning

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de la défense, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le vingt-huit mai deux mil douze.

Le Président constitutionnel de la République
Ollanta Humala Tasso

Le Président du Conseil des ministres
Óscar Valdés Dancuart

Le Ministre de la défense
José Antonio Urquiza Maggia

Le Ministre de l'intérieur
Wilver Alfredo Calle Girón

Le Ministre de la justice et des droits de l'homme
Juan F. Jiménez Mayor